

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Juan Guillermo Martínez González
DEMANDADO	AFP Protección S.A. y Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 12 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>012 2021 00342</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 0180 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Confirma sentencia

En la fecha, **veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, en relación a la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Juan Guillermo Martínez González**, en contra de la **AFP Protección S.A., y Colpensiones**. Radicado único nacional 05001 3105 **012 2021 00342** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 026**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

El demandante pretende se declare la ineficacia del traslado que realizó al régimen de ahorro individual a través de Protección S.A., en consecuencia, se entienda sin solución de continuidad la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, condenándose a Protección S.A., a devolver a Colpensiones el saldo de la cuenta de ahorro individual, incluyendo los rendimientos financieros, cotizaciones, cuotas de administración, seguros previsionales, y garantía de pensión mínima, y a esta última a que acepte el reintegro. Pide también costas del proceso.

En sustento de ello afirma que, nació el 3 de julio de 1964, afiliándose al régimen de prima media con prestación definida en enero de 1995, trasladándose al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de Protección S.A., el 11 de mayo de 2000, acto que suscribió al estar en la firme convicción que esto no le acarrearía perjuicios sino beneficios, entre ellos que podía acceder al derecho pensional de manera anticipada, no obstante, omitió indicarle las condiciones que debía cumplir para ello, así como que podía retractarse de su decisión, no se le hizo énfasis en temas técnicos y determinantes en la construcción de la pensión, como que la mesada pensional depende del capital ahorrado, el cual está compuesto por aportes, rendimientos y bonos pensionales, y también de factores como la fluctuación, volatilidad del mercado, intereses técnico y número de beneficiarios, entre otros. Afirma que solicitó la proyección de la pensión, llevándose la sorpresa que la misma no guardaba armonía con lo expuesto en la asesoría, en tanto, en dicho fondo obtendría una mesada de \$1.653.411,00 mientras que en el RPM sería de \$5.520.240,00; que solicitó ante Colpensiones el retorno, siéndole negado.

En auto del **17 de noviembre de 2021, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, enteradas de la actuación las demandadas allegaron escritos de contestación así:

**Colpensiones**, de los hechos tiene como cierta la fecha de nacimiento del demandante, su vinculación al régimen de prima media con prestación definida, aclarando que la misma se dio el 13 de septiembre de 1994, y que posteriormente se trasladó a la AFP Protección S.A, así mismo admite la solicitud elevada a la entidad instándola para que ordenara el retorno de régimen, y la respuesta dada a la misma. Con relación a los restantes supuestos de hecho manifiesta que no le constan. **Presentó oposición a las pretensiones**, y formuló las **excepciones de fondo** de inexistencia de la ineficacia en el traslado de régimen; indebida aplicación de las normas en materia de asesoría de traslado pensional; carga dinámica de la prueba no puede ser aplicada en forma genérica, sin ninguna ponderación, y en desigual de las partes involucradas en un proceso; errónea interpretación e indebida aplicación del artículo 1604 del C.C.; se otorga un alcance que no corresponde al contenido de los Decretos 663 de 1993 y 692 de 1994, en cuanto a la voluntad vertida en el formulario de afiliación; el retorno en cualquier tiempo al RPM, faltando menos de 10 años para la edad de pensión debe realizarse atendiendo: **1.** La expectativas pensionales del afiliado, y **2.** La sostenibilidad financiera; desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones – art 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005; prescripción, innominada, genérica, desconocimiento del precedente emitido por la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, buena fe, devolución de aportes debidamente indexados, inoponibilidad de la

responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen, e imposibilidad de condena en costas.

**AFP Protección S.A.**, admite la fecha de nacimiento del actor, y su afiliación a la entidad el 11 de mayo de 1999, frente a los demás supuestos manifiesta que no le constan o no son ciertos, aclarando que el demandante suscribió el formulario de afiliación de manera libre, espontánea y sin presiones, precedido de una asesoría adecuada, correcta y suficiente. Afirma que se dio *"una asesoría COMPLETA Y COMPRENSIBLE sobre el Régimen de Ahorro Individual y el Régimen de Prima Media, señalando las diferencias que existen entre uno y otro, el funcionamiento de ambos, los requisitos para acceder a la pensión y las modalidades de la misma, todo esto con el fin de crear en la demandante suficientes elementos de juicio para que ella misma valorara cuál régimen consideraba más conveniente y le representaba más beneficios de acuerdo con sus expectativas personales, por lo que la expresión de que "no cabía duda que el traslado al régimen de ahorro individual administrado no generaría ningún perjuicio" constituye una mera apreciación subjetiva del actor con base en su juicio personal al momento de la afiliación a PROTECCIÓN."* Se **opuso a la prosperidad de las pretensiones** y formuló las **excepciones de mérito** que denominó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restituciones mutuas en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y seguros previsionales, cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, y porque afecta terceros de buena fe, y la innominada o genérica.

La primera instancia **culminó** con sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito, en la que **declaró** la ineficacia de la afiliación del señor Juan Guillermo Martínez González al RAIS en el

marco de la vinculación a la AFP Protección S.A., entendiéndose para todos los efectos afiliado sin solución de continuidad al RPMCD dirigido por COLPENSIONES. Condenó a la AFP Protección S.A., a que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión, restituya a Colpensiones *el valor de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos del señor JUAN GUILLERMO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, de igual modo debe trasladar lo descontado por concepto de gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexado con cargo a sus propios recursos. A la par se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aporte y demás información relevante que los justifique.* Ordenó a Colpensiones activar la vinculación del señor Juan Guillermo al régimen de prima media, sin solución de continuidad, recibir los valores indicados e integrarlos al fondo común, para que su equivalente en semanas se refleje en su historia laboral. Declaró infundadas las excepciones de prescripción y compensación, e impuso costas a cargo de Protección S.A.

La juzgadora, luego de referir la línea de la jurisprudencia especializada sobre el tema de la ineficacia de traslado de régimen pensional, figura bajo la que se debe estudiar el asunto, encontró que al momento del traslado realizado no se le proporcionó al actor información eficaz, oportuna, completa, comprensible, para la toma de su decisión, en la cual se le dieran a conocer las alternativas, diferencias entre uno y otro régimen, beneficios, inconvenientes, ventajas y desventajas, el capital que se debía acumular en el régimen de ahorro individual, así como tampoco se le dijo sobre las modalidades de la pensión y la redención anticipada del bono pensional, entre otros aspectos, sin que el formulario de afiliación constituya una prueba suficiente para acreditar los supuestos exigidos,

por lo que al encontrar establecida la falta al deber de información por parte de la AFP accionada, procedió a la declaratoria de la ineficacia, con las consecuencias y restituciones ya indicadas.

Al no haberse interpuesto recurso contra la decisión, se conoce la misma en el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones.

De la oportunidad para presentar **alegaciones** hizo uso De la oportunidad para presentar **alegaciones** hizo uso **Colpensiones**, solicitando la revocatoria de la decisión al haberse trasladado la parte a través de la firma de un formulario de afiliación de manera libre, espontanea y sin presiones, tal y como quedó plasmado con la imposición de la firma, enmarcándose el deber de información que tenía el fondo privado en los postulados del Decreto 663 de 1993, sin que sea razonable jurídicamente imponer obligaciones y soportes de la información no previstos en la Ley, pues, con ello, se desvirtúa el principio de confianza legítima, legalidad y debido proceso. Afirmo que la carga dinámica de la prueba no puede invertirse de una forma arbitraria, y sin considerar los aspectos puntuales de cada caso, tal y como lo preciso la Corte Constitucional en sentencia C086-2016, sin que, para el caso, la parte actora acredite los supuestos de hecho que alega, pretendiendo bajo esta figura que se le exima de probar mínimamente lo alegado.

Adujo que el Decreto 2241 de 2010, exige al consumidor financiero unos deberes, por lo que debe tenerse en cuenta el silencio en el transcurso del tiempo y con ello la decisión consciente de permanecer en el régimen seleccionado, sin que se advierta, por demás, que el traslado se haya dado por falta de información, pues, el asesor le brindó una asesoría y con ella fue que tomó la decisión de suscribir el

formulario, afectando la declaratoria de ineficacia de la afiliación la sostenibilidad financiera del sistema, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad de los demás afiliados de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución.

Finalmente, y en caso de confirmarse la decisión, insta para que se ordene la devolución de la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos que se hubieren generado, los descuentos efectuados por garantía de pensión mínima, cuotas para el cubrimiento de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, junto con las cuotas de administración, primas de reaseguro, debidamente indexada.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Teniendo en cuenta lo decidido por el a quo, y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si con ocasión de la declaratoria de ineficacia de la movilidad de régimen pensional del demandante hay lugar a ordenar su retorno al RPMPD, en caso afirmativo que conceptos se deben restituir.

Pues bien. Unánime, pacífica y reiterada ha sido la línea mayoritaria de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima

media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. En sentencia SL1452 de 2019 dijo:

*En relación con la validez del acto de afiliación a cualquiera de los regímenes pensionales, comienza la Sala por precisar, que, como se indicó en sede de casación, conforme el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, «los trabajadores tienen la opción de elegir libre y voluntariamente» el régimen que mejor se ajuste a sus intereses, por cuanto cada uno tiene características disimiles y regladas, sin que en dicha decisión pueda ejercerse con obstrucción o presión alguna de empleador o terceros, so pena de incurrirse en las sanciones del artículo 271 ibídem.*

*Ahora, como se adoctrinó por la Corte, entre otras, en las sentencias CSJ SL1421-2019 y CSJ SL1688-2019, las AFP, como actores privados en el nuevo sistema de seguridad social, «encargados de la gestión fiduciaria de los ahorros de los afiliados en el RAIS», son quienes desde un principio han estado sometidos a reglamentaciones, restricciones y deberes propios de las actividades que ejecutan, al estar inmersos en la prestación y/o administración de un servicio público de carácter obligatorio, que está bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según el artículo 48 de la CN, contexto en el cual, según el numeral 1º del artículo 97 Decreto 663 de 1993, tienen «[...] la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses». Lo anterior, como una forma de materializar el principio de transparencia en la elección las operaciones y opciones del mercado, y los de prevalencia del interés general y buena fe, de quienes prestan un servicio público.*

Y en la SL1689 de 2019 se indica:

*(i) Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional -artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 y demás disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal-. Posteriormente, se agregó a dicho deber la obligación de otorgar asesoría y buen consejo -artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010- y, finalmente, se impuso la exigencia de doble asesoría -Ley 1748 de 2014, artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015, Circular Externa n.º 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera. Obligaciones que deben ser acatadas en un todo, a fin de que los usuarios del sistema puedan adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional.*

*(ii) En el campo de la seguridad social, existe un verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), pues dicho*



*procedimiento garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, que el usuario comprende las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen; esto es que, previamente a tal acto, aquel recibió información clara, cierta, comprensible y oportuna. Luego, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información.*

*(iii) La aseveración del afiliado de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarse el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, por cuanto la documentación soporte del traslado debe conservarla en sus archivos, y en tanto es la obligada a observar el deber de brindar información y probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.*

*(iv) Ni la legislación ni la jurisprudencia establecen que se debe contar con una expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información; de modo que procede sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.*

Luego, acertada resulta la declaratoria de **ineficacia del acto de traslado** dispuesta por la primera instancia, caracterizada porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos, siendo sus consecuencias idénticas a las de la nulidad – vuelta al estado anterior, explicándose por la Sala de Casación Laboral que en estos casos:

*... los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJSL1689-2019, CSJSL3464-2019, CSJSL4360-2019 entre otras).*

Y en sentencia SL2877-2020, radicación Nro. 78.666, fecha 29 de julio de 2020, frente al tema en concreto de las restituciones económicas, luego de transcribir el artículo 1746 del Código Civil, advirtió:

*Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

*Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular.*

*De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.*

*En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Subrayado intencional.*

Y en relación con los porcentajes para el fondo de garantía de pensión mínima dijo:

*En cuanto a los aportes para financiar la garantía de pensión mínima, es oportuno señalar que el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 estableció aportes adicionales sobre el ingreso base de cotización con destino al fondo de solidaridad pensional para financiar la garantía de pensión mínima, para quienes devengaran entre 4 y 16 a 20 salarios mínimos legales mensuales, así como un fondo para el manejo de los mismos –artículo 14 ibídem-.*

*Pues bien, dicho artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-797-2004, pero quedaron vigentes los aportes adicionales, de modo que dichos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas, en una subcuenta separada hasta que se cree de nuevo un fondo similar que se encargue de su administración; de hecho, de la subcuenta de cada AFP se financian aquellas prestaciones. Así lo regula el artículo 8.º del Decreto 510 de 2003, hoy compilado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1833 de 2016. Además, el artículo 7.º del Decreto 3995 de 2008 contempla que cuando se efectúe un traslado de recursos del RAIS al régimen de prima media con prestación definida, debe incluirse la cotización correspondiente para la garantía de pensión mínima.*

***Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones. Lo que desvirtúa la argumentación del a quo sobre el particular.***

Y concluye la Corte:

***Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima».***

Y en sentencia SL 081 de 2021, se reitera:

*Como argumento adicional, la Sala debe señalar que la consecuencia derivada de la decisión de ineficacia también aparece que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías... deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones... tal como se dejó sentado, entre otras, en las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJ*

*SL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, y bajo el entendido que la consecuencia es la ineficacia del traslado, en la que se dijo:*

Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad.31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:

[...]

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Bajo la misma línea, en decisión CSJ SL1688-2019, se manifestó:

Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (fl. 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a gastos de administración, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.

Puntualizando:

*se impone adicionar el numeral quinto de la misma decisión, con el fin de precisar que, además del capital ahorrado por la accionante, junto con los intereses y rendimientos producidos sobre el mismo, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A se encuentra en la obligación de trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones ... los valores correspondientes a los gastos de administración, los cuales, según se expuso en precedencia, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

Posición que ha sido traída hasta la fecha, tal y como se puede evidenciar, entre otras, en la sentencia SL587 de 2021, SL3202 de

2021, SL4803-2021, SL4609-2021, SL587-2022, SL1055-2022, por lo que acogándose por esta instancia un argumento de autoridad y acatándose el precedente que en línea mayoritaria sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, se impone entonces la confirmación de las restituciones ordenadas por la juez primer grado, esto es, los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos financieros y los gastos de administración (que en los términos del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, incluyen además de tal concepto, las primas de seguros y reaseguros al igual que el porcentaje destinado a garantía de pensión mínima), dineros que deben ser reintegrados con cargo a sus propios recursos y debidamente indexados (ver entre otras, sentencias SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021, SL587-2022, SL1055-2022).

Los rubros antes mencionados no se encuentran afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción, pues pese a que los mismos no están ligados al reconocimiento de la prestación, si están íntimamente relacionados con la declaratoria de ineficacia, la cual según criterio de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral al ser una pretensión declarativa no se extingue por el paso del tiempo **cuando de afiliados se trata**, sumado a que solo en el trámite del proceso es que fue declarada y como consecuencia se dispone su restitución.

**Sin costas** en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del

Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Juan Guillermo Martínez González**, en contra de **Protección S.A., y Colpensiones**.

**Sin costas** en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**  
Magistrada

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado